ANÁLISIS TERRITORIAL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA*

*María de Estrada***

MARCO TEÓRICO

El espacio, y el modo en que se organiza, denotan el carácter histórico que asume la naturaleza mediatizada por la actividad práctica del hombre, y, como tal, constituye el fundamento de esta actividad, pero también su producto. Producto material elaborado, modelado y organizado en función de esa actividad estructurada a partir de un conjunto de relaciones sociales dentro de las cuales se inserta.

La naturaleza social del espacio adquiere un carácter distinto en cada etapa histórica y como espacio organizado por el hombre, en él se plasman las diferencias en el desarrollo de las fuerzas productivas que atañen a los distintos sectores de estas sociedades, materializando, espacializando la lucha de clases.

Dentro de estas fuerzas productivas no podemos dejar de considerar las fuerzas naturales, en tanto las mismas estén incorporadas al proceso productivo, sean utilizadas en el marco de estas relaciones sociales para la producción y reproducción de la vida misma.

Pero el desarrollo desigual de las fuerzas productivas se puede ver tanto en su carácter temporal (lo que genera que en un mismo espacio

---

* Mesa: Globalización, Resistencia y Movimientos Sociales

** DNI 29.067.760, Mar del Plata, Argentina. Universidad nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Profesorado y Licenciatura en Geografía. 5° año. deestradamaria@hotmail.com.

coexistan distintos grados de desarrollo de las mismas), como en su carácter espacial, lo que genera cierta **división social territorial del trabajo** que se traduce en la existencia de áreas centrales, vinculadas al mercado externo, inversiones de capitales trasnacionales, etc., y áreas periféricas, dependientes y marginales respectos a las primeras.

Dicha división social territorial del trabajo,

> lleva implícitas nuevas formas de diferenciación basadas en el intercambio y en la circulación de mercancías, incluido el capital, condicionadas por las características del desarrollo desigual de las fuerzas productivas, por el tipo de relaciones de producción y también por la naturaleza de los sistemas de dominación impuestos en la sociedad. El tipo de instituciones jurídicas y políticas e ideológicas imperantes, refuerzan, mantienen y legitiman el esquema de división social territorial del trabajo establecido y convalidan los roles asignados a las diferentes áreas y regiones. (Sormani, 1974)

En América Latina, el desarrollo desigual de las fuerzas productivas alcanza límites no vistos en otros espacios, lo cual se materializa en la configuración de los diferentes espacios y en las relaciones que se establecen entre ellos.

Este proceso de polarización social y espacial se vio acelerado abruptamente en los últimos 20 años con la entrada en vigencia del modelo de acumulación neoliberal. El que fue incorporado, por medio de dictaduras militares y a costa de miles de vidas, en la gran mayoría de países de la región donde pusieron en práctica elementos superestructurales como la desregulación financiera y la apertura de mercados que perdurarán más allá de estos gobiernos antidemocráticos.

Durante la década de los 80, los mismos fueron legitimados con el retorno a la democracia en la mayoría de los países. En el marco del Consenso de Washington se dictarán los nuevos parámetros que regirán este modelo. Impuestos por Estados Unidos, y abalados por las oligarquías de los distintos países, consistieron en políticas de ajuste y estabilización que se perpetúan y se hacen sentir hasta el día de hoy. El endeudamiento externo de los Estados, alimentado por el intenso flujo

de petrodólares, será la nueva herramienta que permitirá la exigencia de reformas en todos los ámbitos (educación, salud, política fiscal, condiciones laborales, etc.)

Este "paquete" de medidas que fueron aplicadas casi con unanimidad por los distintos gobiernos, consiste en flexibilización de la mano de obra, ingreso de capitales extranjeros (que lleva a la trasnacionalización de las economías y la aparición de grandes consorcios empresariales multinacionales de un peso inusitado), privatización de empresas estatales, achicamiento del aparato estatal, etc. Todas estas medidas traerán como consecuencia la pérdida de soberanía de los Estados que delegan múltiples funciones al capital privado, mientras se mantiene como garante de este orden y de la perpetuación de las condiciones vigentes para los intereses empresariales.

Ante este avance del modelo neoliberal, se puede observar en América Latina que las democracias adquieren un sentido meramente electoral, perdiendo su poder real y representatividad para asumir la toma de decisiones, donde el control es ejercido por el gran capital independientemente de los partidos gobernantes.

A su vez, este modelo económico, político e ideológico, que se basa en la exportación de materias primas (ya sean cereales, recursos mineros, hidrocarburos, etc.) para obtener divisas que garanticen el pago de las deudas externas y la importación desenfrenada de bienes industrializados, genera una transformación en el desarrollo de las fuerzas productivas, donde se beneficia un pequeño sector ligado a estas actividades "promotoras" del supuesto crecimiento económico, a costa de el perjuicio de un inmenso número de actividades productivas que quedan relegadas, ya sea porque no pueden competir en igualdad de condiciones con los consorcios multinacionales o porque sus productos están destinados al mercado interno, abastecido mayormente por importaciones.

El espacio, fundamento y producto de este desarrollo desigual de las fuerzas productivas, se verá transformado en consecuencia. Aquellos sectores ligados a la exportación de commodities, actuarán como espacios centrales, principalmente en el espacio rural; enclaves en torno a los cuales

se desarrollará un nivel de infraestructura que permite su rápida salida hacia el mercado externo. Por el otro lado, miles de campesinos se verán desplazados ya que no cuentan con los medios necesarios para que sus producciones resulten rentables (minifundios con escasa o nula incorporación de adelantos tecnológicos, cultivos de subsistencia...), teniendo que migrar hacia áreas urbanas a formar parte del sector informal de las mismas o a vender su fuerza de trabajo en condiciones paupérrimas.

Simultáneamente, en el espacio urbano, el proceso de apertura de los mercados, ligado a tipos de cambio beneficiosos para las importaciones y a la falta de regulación y de adopción de medidas por parte de los Estados, implicará la desindustrialización de la mayoría de los países, con la consecuente pérdida de miles de empleos y el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población que ve sumarse a esto el retiro del Estado como garante de la mayoría de los derechos sociales.

El crecimiento de las tasas de desocupación, de pobreza, marginalidad, inseguridad, conllevan el deterioro ambiental de estos espacios. Pero también se observa el fenómeno inverso protagonizado por un pequeño sector que ha sido favorecido por estas medidas, que ante la pérdida de calidad paisajística, ambiental, etc. del espacio en el que vivía, acentúa el proceso de desplazamiento de las clases sociales altas y medias hacia la periferia, donde son construidas una gran cantidad de urbanizaciones privadas (countries, barrios privados, clubes de campo, etc.) que conforman los denominados "archipiélagos urbanos".

El supuesto y promocionado "éxito" del neoliberalismo mostró su primera fizura con la crisis mexicana de 1994, la cual coincidió con la entrada de este país al NAFTA y el levantamiento zapatista en Chiapas. A ésta, le siguieron otras crisis financieras que evidenciaban la fragilidad de la situación en el resto de los países. Pese a las diversas estrategias esgrimidas desde los centros de poder para ocultar estas circunstancias, las falencias fueron aumentando a medida que este modelo social, político, económico y cultural se imponía con más dureza y tenacidad.

A principios del nuevo siglo, podemos encontrar dos claras respuestas en oposición al modelo neoliberal. Por un lado lo que podríamos llamar la

"respuesta formal", que consta de la elección, por vía democrática, de los llamados "gobiernos post- neoliberales" (es el caso de Lula en Brasil, Tabaré Vasquez en Uruguay, Kischner en Argentina, etc.), que si bien llegan al poder con un claro imperativo en contra del neoliberalismo, quedan mayormente en la retórica y el simbolismo y no avanzan en verdaderas reformas, manteniendo sin modificaciones la superestructura que viabilizó la puesta en marcha y consolidación del neoliberalismo.

Por el otro lado, la respuesta **"informal"**, es decir por fuera de las instituciones existentes, la están dando los distintos movimientos sociales en América Latina. Es el caso de los Sin Tierra en Brasil, los zapatistas en México, los cocaleros en Bolivia, por citar sólo algunos de los casos más conocidos. Se diferencian de los movimientos de antaño en que el Estado como institución se erigía como centro de la lucha, el espacio político de poder y era el trabajo la actividad aglutinadora por excelencia.

Estos movimientos sociales, al actuar muchas veces por fuera del "edificio jurídico y político" erigido para el mantenimiento del status quo, al interactuar por vías alternativas con los medios de producción, al basar su lucha en el cambio de la forma en que se articulan las fuerzas productivas, generarán transformaciones tanto en las formaciones espaciales, como en la división social territorial del trabajo. Nuevamente encontramos aquí la **materialización de la dialéctica del espacio, ya que estos movimientos tienen una base territorial de la que se desprenden sus reivindicaciones, sus luchas, su forma de actuar, sus objetivos; pero así mismo se constituyen como actores sociales transformadores de dicho espacio.** En palabras del geógrafo brasilero Porto Goncalvez, ***"re-significan el espacio y así, con nuevos signos grafican la tierra, geografican, reinventando la sociedad. La geografía, de este modo, se transforma de sustantivo en verbo – acto de marcar la tierra."*** (Porto Goncalvez, 2003).

Desde esta óptica se pretende analizar la forma en que llevan adelante este "geografiar", las características peculiares de cada espacio donde estas luchas se erigen, así como la forma en que las mismas transforman el territorio. Para el presente trabajo tomaré tres casos específicos: el

Movimientos de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, los campesinos cocaleros del Trópico de Cochabamba en Bolivia y las fábricas recuperadas en Argentina.

Como se verá más adelante, los tres casos presentan rasgos sumamente diferenciales, tanto en su origen, organización, respuesta a la superestructura vigente, propuestas, formas de lucha, etc. Muchas de estas características están intensamente ligadas al modo en que se han estructurado los diferentes espacios a través del tiempo.

EL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA

El Golpe de Estado de 1964 tuvo consecuencias inmediatas para el campo brasileño, ya que se planteó como principal objetivo "modernizar" las estructuras agrarias conforme al nuevo modelo que incorporaba a Brasil como proveedor de materias primas en el mercado mundial, basándose en la alianza entre el capital financiero y la vieja burguesía agraria.

Si bien el dictador Castelo Branco decretó la Primera Ley de Reforma Agraria de Brasil, denominada "Estatuto de la tierra", ésta era una estrategia para distribuir las tierras como forma de evitar posibles revoluciones sociales, como la que había ocurrido hacía sólo 5 años en Cuba. Este "estatuto de la tierra" era de corte progresista, diseñado por técnicos capacitados para dicha tarea. Sin embargo, la presión de los latifundistas fue tal, que la Reforma nunca fue llevada a cabo, pero en cierto modo logró su objetivo, ya que desarticuló por un breve período, los conflictos por la tierra y las luchas sociales que estaban ocurriendo en el espacio rural.

Muy por el contrario del espíritu del "Estatuto de la tierra", en Brasil se inició con la dictadura, un proceso de mecanización, concentración de las tierras y expansión del cultivo de soja transgénica, que produjo la sustitución de la mano de obra rural acompañado por un gran aumento de la producción a gran escala sobre la base de la expulsión de los trabajadores rurales asalariados, los arrendatarios y aparceros de los latifundios, principalmente en el Sur del país.

Muchos de estos productores encontraron una solución migrando a las fronteras agrícolas, donde el gobierno federal implementó proyectos de colonización. La propaganda oficial, la construcción de núcleos poblacionales y de grandes rutas, promovió la colonización de la región amazónica. Esto significó una transferencia neta de mano de obra desde el sur del país hacia la zona del Amazonas, con el fin de extraer de allí maderas y desmontar inmensas extensiones de tierra para la incorporación de este espacio a la producción extensiva.

Otra parte de la población expulsada del campo se dirigió hacia las ciudades, donde se estaba llevando a cabo un fuerte proceso de industrialización conocido como "el milagro brasileño", milagro que duró menos de 10 años.

Expulsados del campo por la modernización de la agricultura y marginados de la ciudad por el fracaso de la industrialización, se plantea un interrogante que intenta ser respondido por el MST día a día: ¿Qué perspectivas restaban para estos trabajadores sin tierra?

El Estado brasileño pudo profundizar sus políticas de concentración de la tierra y de reorientación de la producción agrícola ayudado por la constante represión de los distintos movimientos campesinos, intentando "disciplinar" (sin éxito), la mano de obra rural. Pese a esto, la resistencia campesina se fue rearticulando acompañada por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), institución de la Iglesia Católica que actuó como aglutinadora de los distintos reclamos de los trabajadores rurales.

En 1979, en el Estado de Río Grande Do Sul se produjo la primera ocupación de la tierra en la Hacienda Sarandí, que ocupaba 24.000 hectáreas. Esta Hacienda había sido desapropiada por el Gobernador Estatal en 1962. La distribución de las tierras no pudo ser llevada a cabo por la finalización del mandato de este político. Muchas familias que no recibieron lotes se desplazaron hacia el Municipio de Nonoai, ubicado al Norte. Allí existe una reserva indígena que posee más de 15.000 hectáreas, reconocidas por el gobierno desde 1847. En mayo de 1978, con el apoyo del Consejo Indigenista Misionero, estos grupos originarios

expulsaron a las familias que se habían instalado allí. Muchos de estos campesinos sin tierra retornaron hacia la zona de la Hacienda Sarandi, reclamando que les entregaran tierras. Reprimidos por la policía, estos grupos comenzaron a organizarse, a realizar asambleas en los distintos campamentos para analizar cuáles eran las posibles salidas al conflicto. Con el apoyo de la CPT, comenzaron las negociaciones con las autoridades políticas. Ante la falta de respuesta, la noche del 6 de septiembre, 110 familias entraron y ocuparon las tierras, con el lema de la lucha por el derecho a trabajar. A los 20 días, 170 familias más ocuparon otro sector del latifundio.

En 1980 comenzaron las ocupaciones en el Estado de Santa Catarina y en 1981 en Paraná y Sao Paulo, extendiéndose esta modalidad de ocupación de la tierra por todo el país. Mientras tanto, la CPT comenzó a promover el debate y encuentro entre los distintos movimientos, los cual significó un reconocimiento por parte de estos actores sociales de que su realidad se repetía en los distintos Estados y llevó a la clara distinción del conflicto: su principal enemigo era el modelo de desarrollo económico, que beneficiaba los intereses de los latifundistas y de los grandes empresarios, a costa de los pequeños productores y los sectores más desfavorecidos de Brasil. Se puede afirmar que se trata de un proceso de creación de "conciencia de clase", lo cual permitiría articular la lucha de una manera mucho más sólida y contundente.

En 1984 se realizó en la ciudad de Cascavel, Estado de Paraná, el Primer Encuentro Nacional de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, donde se fundó el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), declarando como objetivos fundantes que la tierra debe estar sólo en manos de quienes la trabajan, que su lucha es por una sociedad sin explotados ni explotadores y que se trata de una lucha que debe ser articulada con los trabajadores de la ciudad y del resto de América Latina. En el plano específico de la lucha por la tierra, el MST buscaba la legalización de la tierra ocupada por los trabajadores, la desamortización de los latifundios y de las tierras de las multinacionales, la prioridad de las políticas

gubernamentales dirigidas hacia los pequeños productores, teniendo como base de su reivindicación la Reforma Agraria en Brasil.

Si bien el Presidente Sarney, primer gobierno democrático luego de 20 años de dictaduras militares, firmó la puesta en marcha del Plan Nacional de Reforma Agraria, éste no se llevó a la práctica (se asentaron sólo el 6% de las familias previstas). La falta de respuestas llevó a la profundización de la lucha del MST, que fue transformándose no sólo en una lucha por la tierra, sino básicamente en una lucha clasista, postura que implicó la ruptura con la Iglesia Católica.

Durante el gobierno de Fernando Collor, la confrontación entre el Estado y el MST, cuyos objetivos se iban consolidando, se potenció y en sus dos años de mandato sólo se asentaron 500 familias. Fue este gobierno que permitió que del partido político organizado por los fazenderos y sectores de la burguesía asociados al capital financiero, se crearan fuerzas paramilitares que actuaran contra el MST exterminando a muchos de sus principales líderes.

En 1993, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Agraria, que volvía a colocar la cuestión de la "función social" de la propiedad de la tierra (establecida incluso en la Constitución del país), como principal criterio para la desapropiación. Esta ley fue rápidamente modificada en respuesta a las presiones de los distintos grupos de poder, por lo que perdió el espíritu con el que había sido sancionada.

En el año 1995, apoyado por los latifundistas y los principales grupos económicos, Fernando Henrique Cardoso fue electo Presidente de Brasil. Su gobierno priorizó la apertura del mercado a las importaciones, estimuló la entrada de capitales extranjeros y la privatización de empresas estatales. En ese mismo año, en el Congreso Nacional del MST, fueron replanteados los principales objetivos del Movimiento, ya declarado Movimiento de masas de carácter sindical, popular y político. Sus objetivos generales pasaron a ser:

1 - Construir una sociedad sin explotados donde el trabajo tenga supremacía sobre el capital.

2 - La tierra es un bien de todos, por lo que debe estar al servicio de toda la sociedad.

3 - Garantizar trabajo a todos, con una justa distribución de la tierra, la renta y las riquezas.

4 - Buscar permanentemente la justicia social y la igualdad de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales.

5 - Difundir los valores humanistas y socialistas en las relaciones sociales.

6 - Combatir todas las formas de discriminación social y buscar la participación igualitaria de la mujer.

También incluyen en el plano de la Reforma Agraria los tópicos referidos al sistema cooperativo, la agroindustria, la utilización de tecnología, la problemática ambiental y la educación, entre otros temas abordados.

FHC agudizó las políticas de apertura de Brasil al mercado externo e incumplió sus promesas sobre entrega de tierras a campesinos. Durante su primer mandato fueron asesinados 150 trabajadores rurales y se sucedieron terribles masacres como la se Eldorado dos Carjás, con 19 muertos, o la de Corumbiara, donde murieron 11 campesinos, entre ellos un niño de 7 años. Así mismo, en este primer mandato se produjo un salto en el número de ocupaciones llevadas a cabo por el MST y el número de familias involucradas en las mismas. En 1998, por ejemplo, hubo 599 ocupaciones en las que participaron más de 76.000 familias. Este crecimiento si bien podría ser relacionado con una postura inicial del gobierno, que se mostraba en un principio más abierto al diálogo y a las presiones reivindicativas, dando así mayor espacio político a los movimientos sociales, tiene en realidad otra explicación más fuerte. El aumento de los niveles de desempleo durante la década del '90 en Brasil, la mecanización de la cosecha de muchos productos agrícolas y la inviabilidad de la pequeña producción agrícola dentro de este contexto, provocaron mayor marginalidad, pobreza y hambre para la mayoría de la población. Esta política estatal excluyente, a la vez que extrema las

condiciones de pauperización de la población, amplía las bases sociales de los movimientos de lucha por la tierra en Brasil, generando una acción más fuerte por parte del MST.

Durante el segundo mandato de FHC (1999- 2003), el número de ocupaciones descendió notablemente. En el 2001 hubo sólo 194 ocupaciones que involucraron a 26.000 familias. Esto se vincula a un conjunto de medidas llevadas a cabo por el gobierno para debilitar al MST. El movimiento, consciente de las dificultades que enfrentaba, priorizó la defensa de las conquistas ya realizadas y la lucha por el crédito agrícola, contra los transgénicos, etc.

Pese a la histórica relación entre el PT y el MST, el movimiento dejó en claro con su accionar que su lucha es por la reforma agraria, la justicia social y la construcción de una nueva sociedad igualitaria y socialista. Lula continuó el modelo promovido por FHC y no llevó a cabo la Reforma Agraria que durante tantos años pregonó. El abril rojo, con más de 80 haciendas ocupadas, es una nítida demostración de que el MST no busca transformarse en un partido político ni mantiene alianzas que se alejen de su objetivo último, que es la destrucción del capitalismo.

En las siguientes tablas se puede observar la distribución de la tierra en Brasil de acuerdo a datos suministrados por el Censo Nacional Agropecuario:

Grupo del área total (has). Censo agropecuario 1985

	N° de establecimientos	%	Área (has)	%
Menos de 10 has.	3.064.822	53	9.986.636	3
De 10 a 99 has.	2.159.890	37	69.565.160	18
De 100 a 499 has	457.762	8	90.474.373	24
De 499 a 999 has.	59.669	1	40.958.296	11
Más de 1.000 has	50.411	1	163.940.461	44
Total	5.792.554	100	374.924.926	100

Grupo del área total (has). Censo agropecuario 1995-1996

	Nº de establecimientos	%	Área (has)	%
Menos de 10 has.	2.402.374	50	7.882.194	2
De 10 a 99 has.	1.916.487	40	62.693.586	18
De 100 a 499 has	411.557	8	83.355.220	24
De 499 a 999 has.	58.407	1	40.186.297	11
Más de 1.000 has	49.358	1	159.493.949	45
Total	4.838.183	100	353.611.246	100

El modo en que opera el MST: las distintas etapas de ocupación de la tierra

La **ocupación** constituye la forma de lucha más importante . Se trata de la entrada y el acampamento de los trabajadores sin tierra dentro de una hacienda. Para que la tierra sea susceptible de ser ocupada debe tratarse de un latifundio improductivo, con lo que la ocupación pasa a ser un espacio de lucha y resistencia para darle a la tierra su función social. Es por esto que se destaca que ocupar no es invadir, ya que estas tierras están vacías de su función social.

Los **acampamentos** se establecen luego de las ocupaciones y su duración es muy variable ya que dependen del reconocimiento y asignación de las tierras por parte del Estado. Se organizan internamente en torno a los principios de democracia, participación de todos en las decisiones, división de las tareas y dirección colectiva. Como las tierras todavía no les son reconocidas, no se las pone en producción, por lo que se sustentan con el producto del trabajo de los acampados, la colaboración de miembros del movimiento que ya conquistaron las tierras, la solidaridad de personas y entidades y recursos provenientes del gobierno. La educación es un elemento clave, ya que es un proceso de fuerte concientización y compromiso con la lucha. Las duras condiciones que deben atravesar y la solidaridad que se establece para poder sobrepasarlo, refuerzan este proceso.

Los **asentamientos**, una vez que el Estado ya les otorgó las tierras para su puesta en producción, son el resultado de un largo proceso de lucha que incluye el acampamento, marchas, actos públicos, etc. Esto genera que la unión, la solidaridad, la resistencia y la cooperación sean los valores rectores. En los asentamientos, cada familia organiza su producción y su existencia. Si bien el Estado les entrega las tierras para su producción, la propiedad de las mismas es conservada por el Estado, ya que el MST propone romper con el régimen de propiedad privada heredable, y según sus propias palabras, su mayor herencia para sus hijos constituye la convicción por la lucha, la cultura del trabajo, por lo que ellos mismos deben procurar sus tierras y vivir este proceso.

El modo en que cada asentamiento se organiza depende de la elección democrática que hagan sus miembros, quienes deciden si se produce colectivamente, el modo de comercialización, el tipo de producción, etc. Los asentamientos no son sólo un núcleo de producción, sino que se constituyen también en núcleos sociales, el centro de convivencia donde se llevan a cabo los proyectos de las diferentes familias. Los distintos asentamientos se articulan en cooperativas que permiten obtener beneficios económicos (aumento de capital, obtención de créditos, etc), beneficios sociales vinculados a infraestructura, educación, salud, y beneficios políticos, ya que la cooperación lleva a superar las luchas específicas dando lugar a luchas de la sociedad como un todo, donde la fuerza de los campesinos toma importancia y puede contribuir a la construcción de una nueva sociedad.

De la lucha práctica del MST fueron surgiendo diversos núcleos que conformaron la organización interna del movimiento y que constituyen sus ejes de desarrollo. Los principales son el Frente de Masas, que se ocupa de la construcción de conciencia y de identidad con la lucha y con el movimiento, el sector de formación relacionado con el proceso de comprensión del funcionamiento del sistema capitalista, la construcción de sistemas alternativos y la formación sociopolítica de los militantes. El Sector de Educación involucra la educación de los chicos y la alfabetización de jóvenes y adultos. Otros sectores de igual importancia

son el de producción, cooperación y medio ambiente, de comunicación, salud, derechos humanos, género, relaciones internacionales y cultura.

Pasaron 20 años, más de 400.000 familias en acampamentos o asentamientos, más de 1,7 millones de personas que día a día luchan por la Reforma Agraria trabajando la tierra. Los resultados del modelo impuesto demuestran que sin reforma agraria no habrá democracia, igualdad ni justicia social, y que esa lucha que en un principio aparecía como contra el latifundio, es en realidad una lucha más difícil y larga, una lucha contra el modelo imperante. Pero a su vez, si bien al principio su resistencia aparecía como la de los campesinos, los procesos llevaron al "descubrimiento" como clase y así a la adquisición de conciencia de clase, lo cual refuerza las bases ideológicas que sustentan su práctica cotidiana.

En Brasil, los latifundios representan el 1% de los establecimientos agrícolas, pero ocupan el 45% de las tierras, muchas veces no explotadas. Simultáneamente, más de 4 millones de familias no tienen tierras donde volcar su trabajo, donde construir su proyecto de vida y de sociedad. El MST erige su lucha sobre una reforma agraria que viabilice los deseos de la clase trabajadora brasileña de construir una nueva sociedad igualitaria y socialista, donde la producción en el campo se eleve teniendo en cuenta la supremacía del trabajo sobre el capital.

La tierra debe ser entendida como un bien de la naturaleza al servicio de toda la sociedad, y así la propiedad de la tierra debe estar subordinada al cumplimiento de esta función social. Este espacio, cuya estructura se naturaliza, sabemos es producto de las históricas relaciones de producción que allí se han sucedido. Fue construido a espaldas de la inmensa mayoría del pueblo brasileño, sobre la base de su explotación y marginación, pero ahora ese pueblo se levanta para ocupar las tierras como un movimiento con conciencia de clase que busca transformar la sociedad construyendo otra realidad.

CAMPESINOS COCALEROS

El Chapare se encuentra ubicado en la parte norte-central de Bolivia, el Trópico de Cochabamba, caracterizada por la presencia de bosques

subtropicales y abundante agua. Si bien en esta región el cultivo de coca data de fines del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XX la zona se encontraba mayormente despoblada.

La Reforma Agraria que sucedió a la Revolución del 1952 incorporó este espacio a la producción mediante programas de colonización dirigidos por el Estado. En 1958 se establecieron colonias dirigidas como la del Chapare, pero la infraestructura era aún demasiado precaria como para que la producción se pudiera incorporar a los mercados de las ciudades.

"Los gobiernos del MNR (1952-1964), en su intento de apuntalar un proceso revolucionario controlado, impusieron la sindicalización del área rural siguiendo el modelo minero y conformaron las milicias armadas revolucionarias." (Vargas, R. y Córdova, E. 2003) para oponerse al poderoso movimiento de la Central Obrera Boliviana (COB). De la misma forma, los gobiernos militares que estuvieron en el poder entre 1964 y 1982 utilizaron al campesinado como base social para oponerse a la resistencia urbana que seguía encabezada por los mineros organizados en la COB.

Así, podemos ver como la sindicalización de estos campesinos, así como su participación activa en la vida política boliviana, hechos fundamentales para comprender la configuración de este espacio en la actualidad, fueron estimulados directamente desde el Estado.

Una serie de sucesos se articularon en la década de los 80 para generar la situación actual: el gobierno de Paz Estensoro (1985 – 1990) mediante el Decreto Supremo 21.060 inició el proceso de implementación de políticas neoliberales en Bolivia. Este decreto generó la privatización de las empresas mineras que implicó el despido de más de 20.000 trabajadores. Muchos de ellos migraron hacia estas zonas de colonización que aún contaban con vastas tierras disponibles.

Sin embargo, el decreto de Paz Estensoro también permitió la liberalización del mercado, por lo que muchos productos alimenticios producidos en otros países comenzaron a introducirse en el mercado boliviano. Esto, sumado a la baja productividad que provoca la minifundización excesiva llevada a cabo por la Reforma Agraria y a

las malas condiciones climáticas, generó un mayor empobrecimiento de los campesinos.

En forma simultánea el precio de la hoja de coca aumentó casi 100 veces a inicios de la década del 80 por el ascenso al poder de militares ligados al narcotráfico, por lo que se produjo un "boom" de la producción de hoja en el Chapare, que ya contaba con una tradición en este cultivo, pero que ahora pasaría a ser el más importante de la región.

Con el retorno a la democracia en el 1982, el país se encontraba en un estado caótico, tanto desde el punto de vista económico como por la creciente participación del narcotráfico en los sectores más altos del poder político, militar y policial.

En este marco, la presión norteamericana surge efecto y comienza la aplicación de políticas dictadas por esta embajada, tendientes a la militarización del conflicto.

Para 1986 los marines norteamericanos ya participaban directamente en acciones militares en territorio boliviano vinculadas a operaciones contra el narcotráfico. Para ese mismo año ya se encuentran rastros de la participación de este país, pero en el mismo negocio del narcotráfico. El escándalo del caso Huanchaca, la fábrica de cocaína más grande descubierta hasta el momento, vinculó directamente a la DEA y más tarde se denunciaría que con este dinero se financiaban los operativos de los Contras en Nicaragua que luchaban contra el gobierno sandinista. (Rodas Morales, 1996)

En 1988 se aprobó la **Ley 1008** sobre el **régimen de la coca y sustancias controladas**. En la misma se divide al territorio boliviano en tres zonas:

- La zona de cultivo tradicional de coca; ubicada en la zona de los Yungas del Departamento de La Paz, donde el cultivo de hasta 12.000 has (lo que se calculó entonces que era para el mercado legal) está permitido.

- La zona de transición; incluye al Chapare, donde si bien el cultivo no está inicialmente penado, debe ser reemplazado, sin utilizar la violencia, por cultivos alternativos, financiados por la ayuda internacional.

• La zona donde la producción está penalizada, que incluye al resto del país.

Esta ley además de dividir territorialmente al país con criterios correspondientes a 1953 (antes de que el Chapare se incorporara como espacio productivo), contradice a la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, que en 1961 incluyó a la hoja de coca en la Lista 1 (prohibición absoluta de cultivo y uso) porque se decidió, sin estudios adecuados e ignorando el valor cultural y sagrado en muchos países, que el mascado de coca era ilegal.

Los campesinos productores de coca rechazan esta Ley porque, como si fuera poco, coloca en un mismo nivel al campesino cocalero que a los narcotraficantes, ya que penaliza a la coca y no a su uso. Reclaman que se legisle en forma separada la producción de hoja de coca y el narcotráfico, ya que esta unificación iguala la coca a la cocaína.

En 1990, en el marco de la firma del documento Santa Fe II entre países productores de coca y Estados Unidos (EUA), se define una estrategia común para América Latina ante los tres problemas que la potencia considera fundamentales: la subversión comunista, el terrorismo y el narcotráfico. EUA destina más de 33 millones de dólares a las Fuerzas Armadas bolivianas para operaciones antidrogas.

Esto nos permite realizar un análisis en dos escalas: en primer lugar, a escala global, una vez desintegrada la URSS, **EUA vuelve a poner el acento en la apropiación de espacios estratégicos para su consolidación como hegemonía unipolar**. El financiamiento de las operaciones militares en Bolivia va de la mano de la injerencia en este territorio.

En la escala local, la implementación de la Ley 1008 implica la contradicción entre lo normado por dicha legislación y la organización prevaleciente del espacio, donde la producción de coca, debido a su alta rentabilidad, puede ser llevada a cabo en las pequeñas parcelas que caracterizan la distribución de la tierra en el trópico de Cochabamba.

La conjunción de estas dos nuevas improntas espaciales, sumada a la historicidad propia de este territorio, llevarán a la organización cada vez

más sólida de los campesinos cocaleros.

En 1991 comienza la militarización de la región, cuando más de 100 instructores militares norteamericanos fueron al país andino para entrenar a casi 1.000 hombres de las FF.AA en "conflictos de baja intensidad" y contra el "tráfico de drogas" (Salazar Ortuño, 2003). De ahí en más se da inicio a esta guerra de baja intensidad, estrategia militar implementada por EUA en Centroamérica en la década de los 80 que consiste en defenderse de posibles núcleos desestabilizadores minimizando la injerencia norteamericana ante la opinión pública, mediante la utilización de los ejércitos locales para lograr sus intereses.

El gobierno de Sánchez de Lozada vinculado más que ningún otro gobierno a los intereses de EUA, comenzó la aplicación de lo que se conocería como la política "Opción Cero": erradicación total de los cultivos de coca considerados excedentarios. Las declaraciones de Richard Boweis, exembajador de los Estados Unidos en Bolivia, en marzo de 1994, dejan en claro la concepción escueta de este asunto por parte de Norteamérica: "El pueblo de Bolivia – concretamente los productores de coca- tienen que aceptar la responsabilidad de la muerte de miles de ciudadanos de Estados Unidos; en consecuencia, ese arbusto (la coca), debe desaparecer."

Con esta presión, en febrero de 1994, el gobierno inició la política de erradicación forzosa de los cultivos de coca en el trópico de Cochabamba, comprometiéndose con EUA a erradicar, para marzo de ese año 5.000 hectáreas de coca a cambio de 20 millones de dólares. Si bien debido a la formación de sindicatos, los productores ya estaban organizados (ya que realizaban tareas conjuntas en lo referente al arreglo de camino, infraestructura común, espacios públicos, etc), este hecho los convocó masivamente para defender sus cultivos con todos los medios disponibles. Así, se reactivaron los comités de autodefensa y las rondas campesinas para defender el territorio. Ante la orden del Secretario Nacional de Defensa Social de "destruir y barrer todos los cultivos ilegales de coca" para lo que se utilizaron brigadas de la Dirección de Reconversión Agrícola (DIRECO) y efectivos de la Unidad Móvil para

el Patrullaje Rural (UMOPAR), comenzaron los enfrentamientos entre estas fuerzas represivas y los campesinos cocaleros.

Los Comités de Autodefensa y las Rondas Campesinas eran una realidad. Mujeres, niños y hombres armados de palos, flechas, machetes y piedras frenaron a las brigadas erradicadoras. Ante esto, el gobierno detiene la erradicación y esboza un acuerdo que nunca cumplió. Es por ello que los bloqueos de carreteras se rearticulan de forma radical, logrando los campesinos el control de más de 100 Km. de territorio. Se trata de un punto importante, porque ellos mismos declaran haber tomado conciencia de lo que significa la "reconquista del territorio" y de allí en adelante la lucha por recuperar la tierra y controlar el territorio se mantendrá vigente.

A su vez, esta fuerte reorganización de los sindicatos del Trópico, las demandas campesinas que comienzan a ser más abarcativas, la gran movilización social que generan los bloqueos, provocarían la radicalización del discurso de este sector. En ese entonces, el líder cocalero Evo Morales declaraba: "Si el gobierno no levanta la erradicación forzosa, los 60 mil productores vamos a pasar a la clandestinidad para enfrentar desde esta misma zona a la política gubernamental. Esto es una decisión de una asamblea reciente."

El gobierno responde con el denominado operativo "Nuevo Amanecer", que con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico, fue utilizado para la represión y detención de los cocaleros (se detuvieron a más de 600 campesinos incluyendo mujeres con sus niños), violación de los derechos humanos e incluso fue asesinado un campesino de 20 años. Fueron prohibidas las reuniones y se detenía a todo aquel que no portaba documentos.

Pese a esto se organizó una marcha hacia la ciudad de La Paz en oposición a la militarización del Chaparc. Esta marcha "Por la vida, la coca y la Soberanía Nacional" comenzó a caminar hacia La Paz el 29 de agosto pese a impresionantes operativos militares desplegados en el Trópico y la detención, un día antes, de Evo Morales. Al grito de "causachun coca, wañuchun yanquis" (viva la coca, fuera los yanquis), comenzaron

la larga travesía de 600 Km. que separa Villa Tunari de la capital boliviana, seguidos por helicópteros militares que tiraron gases lacrimógenos y balines para detener la manifestación. Veintidós días más tarde lograron llegar, gracias al apoyo de la comunidad que fue sumándose, a la ciudad de La Paz 3000 campesinos.

La gran presión que ejerció la marcha y presencia de los campesinos llevó al gobierno de Sánchez de Lozada a convocar a un debate nacional coca-cocaína. Si bien las distintas organizaciones se pronunciaron por la despenalización de la hoja de coca y el ejercicio pleno de la soberanía para tratar el tema, los representantes internacionales manifestaron su rechazo a esta medida y exigieron que "Bolivia respete los compromisos internacionales sobre coca, para continuar con la ayuda económica..."

Aquí queda bien clara la forma en que a cambio de fondos y apoyo financiero, Estados Unidos y otros países, extorsionan a Bolivia reduciendo su soberanía.

Pero el resultado más importante de la marcha Por la vida, la coca y la Soberanía Nacional, se dio a nivel interno de los campesinos cocaleros. Este acto logró fortalecer sus organizaciones, recibir el apoyo de la comunidad nacional e internacional, el respeto a la coca como alimento, ritual y medicina, así como el conocimiento de la situación y los atropellos que se estaban viviendo en el Chapare. Sobre esta base surge la necesidad de construir un instrumento político que fuera realmente representativo de los campesinos, de los indígenas, de los oprimidos. En 1995, se crea el MAS, instrumento político de los campesinos cocaleros, pero que poco a poco iría tomando carácter nacional.

Para esto, la política gubernamental seguía el mismo camino; mesas de diálogo con los cocaleros, pero por detrás firmaba acuerdos con organismos internacionales donde, a cambio de ayuda económica, se comprometía a la erradicación de la coca del Chapare. Por esto, cada vez que se acercaban los plazos acordados, comenzaba la erradicación forzosa a la cual los cocaleros respondían con manifestaciones y bloqueos.

Recién en 1996 se inicia un período de destrucción voluntaria de los

cocales, por la que los campesinos recibían una indemnización que llegó a los 2.500 dólares por hectárea. Este pago generó el efecto inverso, ya que los altos precios llevaron a que muchos campesinos consideraran que lo más rentable era plantar el cocal y hacerlo erradicar al poco tiempo, para invertir parte del dinero en plantar nuevamente con el mismo fin. Esta política llevó al aumento de la producción de hoja de coca en la zona. Mucha de la plata obtenida por la erradicación compensada fue perdida rápidamente, mientras que muchos invirtieron en la compra de autos para taxis (un rasgo distintivo de este lugar) y en la construcción de casas en las localidades.

La presencia y accionar militar en gobiernos democráticos tuvo su máxima expresión entre 1997 y 2002, durante el gobierno del ex – dictador Hugo Bánzer (y luego su sucesor H. Quiroga), quien implementó como política sobre el cultivo de hoja de coca el "Plan Dignidad", basado en cuatro pilares: prevención, desarrollo alternativo, interdicción y erradicación.

Este plan tuvo como objetivo erradicar totalmente la hoja de coca del Chapare para el año 2002. Para ellos se destinaron más de 1.000 millones de dólares, financiados mayormente por EUA. Se creó una Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC), solventada y entrenada por la institución norteamericana Narcotic Agency Section (NAS) para operar instalando sus bases directamente en la zona del Trópico de Cochabamba.

Para la lógica militar de la FTC, la organización sindical campesina es delictiva. Consideran que defienden la coca porque tienen intereses directos en el narcotráfico, sostienen que la nueva forma de organización del tráfico de drogas es por clanes familiares de campesinos. Este cuerpo militar define a los comités de autodefensa como el brazo armado, mientras que el MAS es el brazo político de la organización. Los cocaleros son considerados como "narcoterroristas" entrenados por los miembros de las FARC que viajan desde Colombia.

Los servicios de inteligencia operan en todo el Trópico mediante la intervención de líneas telefónicas, infiltración de agentes en organizaciones de los productores de coca, incorporación de informantes secretos en las

localidades, etc. Esto se complementa con la detención y secuestro de dirigentes, tortura de pobladores, violación de mujeres, y otras violaciones a los derechos humanos. La realización de tareas comunitarias por parte de la FTC, así como el especial énfasis en la acción cívica en las escuelas con los niños, operan, siguiendo la interpretación de Salazar Ortuño, en el marco de los principios de "balas y arroz" de Vietnam o "rifles y frijoles" de las dictaduras militares en Latinoamérica.

Para los cocaleros, así como para diversos analistas, este Plan constituyó en realidad una extensión del Plan Colombia utilizado por EUA para el control y apropiación del espacio andino (riquísimo en biodiversidad y recursos naturales), así como la represión de los movimientos sociales que cuestionan el modelo imperante y se organizan para luchar en su contra.

La militarización del Chapare mediante el plan Dignidad no logró quebrar la relación coca – cocaína ni debilitar al narcotráfico. Incluso la reducción de cultivo de coca en esta zona tuvo como correlato directo su expansión en Perú y en los Yungas de La Paz. Mucho menos consiguió sacar a los campesinos de la pobreza ni debilitar su organización. La reducción de la cosecha de coca de 270 millones de toneladas en 1996 a 30 millones en el 2002, implicó una grave crisis económica para la región. La política de "Coca Cero" dejó como saldo la muerte de más de 60 campesinos y 8 uniformados, a lo que se suman cientos de heridos.

Los programas de Desarrollo Alternativo (DA) que se implementaron simultáneamente, buscaban estimular la producción de bananas, palmitos, ananás y otros cultivos que hicieran posible el desarrollo de la región SIN COCA. Sin embargo, y pese a las millonarias cifras destinadas por EUA y la Unión Europea en esta dirección (nunca tan importantes como las destinadas a la "guerra contra las drogas", pero de gran peso igualmente), estos programas han fracasado.

Ninguno de los cultivos alternativos logra superar la rentabilidad de la coca, que se cosecha hasta 4 veces al año y cuenta con la ventaja de

exigir una gran inversión de mano de obra frente a una reducida inversión en herramientas y otros insumos. Además este cultivo es rentable en pequeñas parcelas, por lo que es compatible con la organización del espacio en este territorio.

Los productos alternativos exigen una articulación totalmente diferente de las fuerzas productivas. Requieren escasa mano de obra (para una hectárea de palmitos son necesarios 6 jornaleros frente a 60 para la misma superficie de coca), limitada a varones adultos y con mayor calificación. Esto tiene consecuencias tanto económicas como sociales, al desarticular la organización del trabajo restringiendo la participación doméstica y el "ayni" (solidaridad entre vecinos para las cosechas).

A esto hay que sumarle que se trata de productos "mejorados" y más tecnificados, por lo que suelen exigir mayor inversión de insumos, en especial fertilizantes y plaguicidas que tienen que ser adquiridos en el mercado externo. Producciones como la del ananá, bananas o palmitos sólo son rentables en gran escala (10 o más hectáreas), lo que excluye a la mayoría de los campesinos.

El DA no ha tomado a los cocaleros como actores sociales protagonistas en su planificación, por lo que se los reduce a meros beneficiarios que tienen que aceptar lo que se decide que es mejor en oficinas de planeamiento alejadas de su realidad y que ignoran su racionalidad. Se calcula que de los fondos que son enviados sólo el 8% llega a los productores ya que el resto se destina al pago de altísimos sueldos de funcionarios y empleados de alta jerarquía, así como consultorías de los cinco niveles por los que los proyectos pasan antes de alcanzar a los productores.

Al fracaso rotundo del Plan Dignidad se le opone la consolidación del instrumento político de los cocaleros, el MAS, a nivel nacional. En las elecciones presidenciales del 2002, Evo Morales logró el segundo lugar con el 20 % de los votos frente al 22% del electo Sánchez de Lozada. Además alcanzó 35 escaños en el Parlamento, pasando a ser la principal fuerza de oposición a los tradicionales partidos de la burguesía nacional (MNR, MIR).

Así, mientras en el Chapare continuaba la resistencia de los cocaleros a la erradicación forzosa y la militarización de esta región, el movimiento que tenía este territorio como base, logró incorporarse por las vías institucionales como un actor de primer orden en la política nacional. En la escala local, el MAS se impuso en la mayoría de las Alcaldías del trópico de Cochabamba, produciéndose esta fuerte paradoja entre las autoridades civiles (ahora los propios cocaleros) que defienden el cultivo de la hoja de coca, y las autoridades militares, dirigidas por Estados Unidos a través del gobierno nacional, que buscan su total erradicación y que consideran a estos dirigentes comunales como "narcoterroristas" (mucho más aún después del 11 de septiembre del 2001), "narcoguerrilleros", etc.

Pese al cambio de gobierno la política de erradicación forzosa se mantuvo, la FTC continuó con bases militares establecidas en el Chapare y el enfrentamiento entre campesinos y militares siguió intensificándose.

El MAS participó activamente de las movilizaciones que lograron derrocar al Presidente Sánchez de Lozada en octubre del 2003, para luego pasar a una política de carácter conciliador con el asumido Carlos Mesa. Sin embargo, y ante la falta de cumplimiento de las promesas hechas después de 12 mesas de diálogo, los cocaleros rompieron con este canal de comunicación con el gobierno. Se decidió masificar y fortalecer las vigilias para impedir la erradicación de los cocales, lo que llevó al enfrentamiento directo con la FTC, que dejó como saldo la muerte de un campesino cocalero y cientos de heridos. Frente a esto, el gobierno suspendió la erradicación por 4 días, hasta que se firmó el 3 de octubre un Acta de Acuerdo entre ambos sectores.

Esta histórica acta de entendimiento de nueve puntos le permite a los cocaleros la **legalización de 3200 hectáreas de coca**, que deberán ser repartidas entre 23 mil productores de todo el territorio, en el marco del compromiso por parte del Gobierno y de los productores de coca de realizar de manera inmediata el Estudio de la Demanda del Consumo Legal de la Hoja de Coca para tener un conocimiento acabado de su mercado legal actual. Hasta entonces, se continuará de forma pacífica y sin compensación alguna, con la erradicación de las superficies que excedan

el "cato" (1.600 m²) para cada afiliado a los sindicatos (Opinión, octubre de 2004).

Las declaraciones de Evo Morales en ese momento nos permiten analizar la importancia que tuvo la legitimación de esta superficie para los productores:

> El acuerdo con el Gobierno ha sido aprobado con aplausos por los compañeros de base, hay regocijo general en el Chapare, porque haciendo cálculos a cada familia cocalera del trópico le corresponde a un "cato" de coca y esto es producto de varios años de lucha con los anteriores gobiernos, que estaban sometidos a la Embajada Norteamericana. (Los Tiempos Octubre 05, 2004)

La victoria de los cocaleros con este logro es netamente importante. La resistencia a la erradicación total de la coca y su creciente importancia en el mapa político de Bolivia les permitió la modificación del marco jurídico correspondiente a la producción de coca. Dentro de este contexto es en el que se encuentran actualmente, pese a la reciente renuncia del Presidente Carlos Mesa. Igualmente, hay aspectos de la realidad del Chapare que no han sido modificados. Los programas de DA mantienen sus falencias estructurales, los campesinos siguen subsumidos en la pobreza y la presencia de Estados Unidos en este territorio se sigue sintiendo en la cotidianeidad, así como el accionar de los servicios de inteligencia y la situación de constante tensión. Los cocaleros exigen desarrollo, pero **desarrollo con coca**, donde se estimule la industrialización de la hoja para sus múltiples posibles usos (té, dentífrico, gaseosas, etc), así como su exportación una vez procesada.

En el paisaje actual del trópico de Cochabamba se puede observar nítidamente la **coexistencia de fuerzas productivas ligadas al sector externo** (que ingresan con el DA) y no logran consolidarse y **aquellas organizadas en torno a la producción de la hoja de coca, que mantienen su carácter tradicional y una mayor coherencia con la estructuración del espacio**. A todo esto hay que sumarle elementos de militarización del territorio que le confieren una impronta peculiar, así como articulaciones clandestinas de más difícil reconocimiento.

En este contexto, la posibilidad concreta de que el MAS alcance la Presidencia del país en las próximas elecciones, suponiendo que Evo Morales pondrá en práctica las reivindicaciones históricas del movimiento, constituye un elemento de total importancia para analizar los cambios espaciales, la "geograficación" que implicaría el triunfo en este plano de los cocaleros.

LAS FÁBRICAS RECUPERADAS

Para analizar el caso de las fábricas recuperadas en Argentina es necesario tener en cuenta el proceso político-económico que llevó a la tremenda crisis del aparato industrial y de la mano de obra de este sector. Este proceso conjuga el rol que ocupa el país en la División Internacional del Trabajo (DIT), así como las políticas implementadas por los distintos gobiernos que se sucedieron.

Hasta 1940 la industria argentina consistía básicamente en el procesamiento de materias primas, directamente ligadas al rol agroexportador de esta economía a nivel mundial; siendo la oligarquía terrateniente local aliada a sectores de capital extranjero, los principales agentes políticos.

Este modelo productivo generó el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires como núcleo político – económico debido a la importancia que dentro de este sistema tenía el puerto para la salida de los productos agrícolas.

Entre 1940 y 1950, el cierre de los mercados externos debido a la suma de la crisis del '30 y a la Segunda Guerra Mundial, transformaron el modelo productivo, pasando el denominado "período de crecimiento hacia adentro" basado en el proceso de sustitución de importaciones. Primero la industrialización de bienes de consumo y más tarde la de productos duraderos destinados al creciente mercado de asalariados, generaron un importante redistribución de los ingresos que favoreció mayormente a los sectores trabajadores.

Este proceso transformó radicalmente la configuración del espacio argentino. La industrialización, centrada principalmente en el Gran Buenos

Aires y extendida en el eje Rosario-La Plata, produjo una masiva atracción de migrantes de origen rural, quienes se veían expulsados del campo como consecuencia de la modernización tecnológica de este sector asociado a la llamada "Revolución Verde". De este modo se produjeron los mayores desplazamientos internos en toda la historia del país. (Gejo, Liberali, 1999)

Así, este numeroso contingente de mano de obra que se abocó a la fabricación de bienes de consumo masivo, se asentó en las periferias conformando numerosos barrios obreros. En su mayoría provenientes de las provincias del interior, se asentaron en el conurbano bonaerense, donde se radicó la mayor parte de las fábricas, acentuando el desequilibrio del sistema urbano argentino, con rasgos de macrocefalia en torno al eje Buenos Aires – Rosario.

Entre 1950 y 1976 el proceso de industrialización se centró en la producción de bienes de mayor complejidad ligados a las industrias química, metalmecánica y de insumos básicos, destinados principalmente a los sectores medios y altos. Este modelo de producción implicó un mayor protagonismo de los grupos empresariales grandes y medianos, relegando a segundo plano a las pequeñas empresas. También es destacable la creciente importancia de las inversiones externas en producciones de mayor complejidad.

De la mano de políticas arancelarias proteccionistas, el sector industrial llegó a representar el 30 % del PBI entre 1972 y 1976, lo cual deja en evidencia la importancia de este sector. La mano de obra industrial se caracterizó por su fuerte sindicalización y el logro de muchas conquistas en el plano de los derechos laborales. La impronta de este período industrializador es determinante para la organización espacial del país. "En 1970 el Gran Buenos Aires llegó a concentrar el 36% de la población del país, mientras el resto de la región pampeana cuenta con otro 36%, sumando el total del Litoral el 72 % del total poblacional" (Gejo, Liberali, 1999).

A partir de 1975 comienza el proceso que terminaría por diluir el anterior período de desarrollo del mercado interno, y que puede ser

denominado "**período de desindustrialización masiva**". Dentro de un contexto general de hegemonía norteamericana (EUA pasa de representar el 35% de las inversiones externas mundiales en 1935 al 60% para 1970) ligada a la Tercera revolución Industrial de carácter cerebro-intensivo, se produce una reorganización del sistema capitalista en su conjunto. La masa de petrodólares originados por el aumento sin precedentes del precio del barril de crudo, generó un proceso de financierización del mercado a nivel mundial que en América Latina se llevó a cabo mediante el endeudamiento de los Estados. De la mano de gobiernos militares, se llevó a cabo la apertura de los mercados que permitiría la "integración" a la nueva DIT.

En Argentina específicamente, la dictadura militar pudo llevar a cabo la inserción de este modelo de trasnacionalización de la economía, redistribución regresiva del ingreso y financierización mediante la represión brutal de la población, y en especial de los sectores obreros, que hasta entonces se encontraban altamente organizados. Se terminó así con un modelo mercado-internista de más de 30 años de aplicación, que llevó al ocaso a sectores productivos de otrora gran importancia.

Pero este proceso desindustrializador no se manifiesta en todos los espacios por igual. Aquellos sectores ligados al mercado externo (industria química, de alimentos y metales) se vieron fuertemente favorecidos, creciendo su participación en el total industrial. Estos rubros se caracterizan por la fuerte presencia de empresas trasnacionales que capitalizan los beneficios del nuevo modelo. El correlato territorial de este proceso muestra que el área central del país disminuye en un 20% la mano de obra ocupada en el sector industrial, frente a un 11% de descenso para el total del país. Las industrias agroalimentarias, así como políticas especiales de promoción industrial en espacios puntuales generaron un incremento del 12% del empleo industrial para el resto del país.

Como contracara se observa un proceso de terciarización de la economía, muchas veces ligado a la creación de empleos públicos para obtener réditos políticos, por lo que se habla de una "terciarización ficticia". Los flujos migratorios cambiaron por primera vez en la historia del país de rumbo, desarrollándose una mayor retención dentro de las principales

ciudades de las mismas provincias. La confluencia de la terciarización ficticia, el estancamiento de la mano de obra para actividades secundarias y el acelerado crecimiento urbano llevó a un aumento de los niveles de marginalidad de la mano del incremento de las actividades informales.

Aquí también, durante la década de los '80, de la mano del Consenso de Washington se diseñaron los lineamientos de la "reforma estructural del aparato estatal", basada en la reducción de su intervención económica, la estabilidad macroeconómica, control del déficit público y de la inflación, estabilidad del tipo de cambio, así como apertura comercial, desregulación financiera y privatización de los activos del Estado.

En Argentina estas políticas fueron aplicadas masivamente durante las dos presidencias de Carlos Menem a lo largo de la década del '90, que completó de esta forma el proceso iniciado en 1976. La apertura económica, basada simplemente en la quita de las restricciones a las importaciones y la simultánea eliminación de los subsidios a las exportaciones, desencadenaría el ingreso masivo de productos extranjeros con los que la industria nacional no podía competir.

El cierre masivo de pequeñas y medianas industrias no tardó en ocurrir. Esto implicó la generalización del desempleo, que de la mano de la derogación de la Ley Nacional de Empleo llegó a alcanzar un índice récord en la historia del país, con un 23% según datos oficiales. En la industria, en 1974 1,5 millones de trabajadores estaban ocupados, reduciéndose esta cifra a 1,38 millones en 1984 y a 1,1 millones en 1994. Para el año 2003 el número de obreros industriales apenas superaba los 600.000. (Maas, P., 2003)

La fuerte corriente de inversiones extranjeras que ingresaron en este período y que llevaron a Argentina a los primeros puestos mundiales de economías desnacionalizadas, no se tradujo en un aumento de su capacidad productiva, ya que sólo la tercera parte de esos capitales fueron invertidos en la construcción de nuevas plantas, mientras que la masa restante financió la compra de empresas ya existentes (tanto mediante las privatizaciones como por la adquisición de empresas privadas de capital nacional). En la actualidad, cerca del 70% de las ventas argentinas son realizadas por

empresas extranjeras.

La elite económica buscó ampliar sus ganancias a corto plazo. Pese a que la paridad cambiaria podría haber sido utilizada para la modernización del capital productivo y el rejuvenecimiento del Parque industrial, esto no ocurrió. Si a ello le sumamos los centenares de cierres de pequeñas y medianas empresas que no estaban en capacidad de competir en esta economía abierta y trasnacionalizada, podemos comenzar a acercarnos a la verdadera magnitud de la crisis del aparato industrial.

Los sectores sindicales tomaron una actitud subordinada al empresariado. "Se transformaron así en representantes de la nueva elite política conformada durante el gobierno menemista y aún vigente en la actualidad" (Muchnik, 2004). La flexibilización laboral implicó el cese de la negociación colectiva de los contratos de los obreros, a lo que hay que sumarle la presión constante que implicaba el aumento constante de la desocupación para quienes mantenían su puesto de trabajo.

La década del '90 vio un incremento sin precedentes en la cantidad de quiebras de empresas. Las modificaciones en la Ley de Quiebras permitieron el uso fraudulento de esta herramienta, facilitando la proliferación de "empresas fantasma" y sirvieron como marco jurídico-legal para el vaciamiento de las mismas (muchos empresarios declaraban la quiebra, realizaban el vaciamiento de las empresas vendiendo maquinaria y mercadería y luego volvían a comprar las mismas empresas por precios mucho menores por medio de testaferros, dejando numerosas deudas impagas, así como salarios y aportes sociales de los trabajadores).

Si bien hubo empresarios que no desarrollaron prácticas de este tipo, en muchos casos, ante la crisis económica se avanzó en la convocatoria de acreedores y quiebras, pero habiendo realizado previamente un desguace de los activos de la empresa que imposibilitaría el cobro de los acreedores, y en especial de los trabajadores. Entre estas prácticas se destacan la creación de nuevas deudas con acreedores ficticios, la no declaración de las mercaderías y su retiro de la planta, la eliminación del inventario de parte del parque de maquinarias pertenecientes a la empresa, etc. (Fajn y

otros, 2003)

Ante el contexto de crisis económica y el gran nivel de desempleo, los trabajadores de dichas empresas intervinieron en el proceso de quiebra para desarticular las maniobras de vaciamiento. Esto se realizó tanto en el plano legal como con la acción directa: fiscalización de inventarios, custodia de máquinas y mercaderías, etc.

Se trata del enfrentamiento directo entre los dueños de las fábricas, que tratan de vaciarlas, y los obreros que buscan evitar esto a toda costa. La fábrica se convierte en el territorio de disputa, ocupación y vigilancia (Fajn y otros, 2003). El relato de Cándido, un pacífico imprentero de 54 años de la Cooperativa Chilavert, permite percibir el real significado de lo que es no tener nada para perder y la decisión profunda de ir hasta el final: *"Cuando vi que la policía entraba pensé, si no es nuestra, no es de nadie, y preparé una molotov para quemar todas las máquinas"*. Sabía que podría haber quedado preso por hacerlo, a lo que responde: *"¿y? Estar afuera sin laburo a mi edad habría sido lo mismo"*.

Durante la segunda mitad de los ´90, ya encontramos importantes casos de empresas que entran en crisis (convocatoria de acreedores, quiebras) y son tomadas por los trabajadores para su recuperación.

Durante el gobierno de la Alianza (1999-2001) los procesos que habían impulsado la crítica situación se agudizaron aún más, profundizando las medidas de corte neoliberal; la crisis llegó a un punto tan alto que los elementos que en los ´90 habían servido como "disciplinadotes" de la clase obrera, se revirtieron y llevaron al fenómeno contrario. Se llegó a un punto de inflexión, donde la lucha por no quedar excluidos del sistema acarrearía a muchos trabajadores a la acción concreta.

Entre el 2000 y el 2001se concentra más del 40% de los casos de recuperación de fábricas. Los sucesos del 19 y 20 de diciembre representan un quiebre en la situación socio-política de la Argentina. En la consigna de "**que se vayan todos**" se encuentra el vacío de poder político-institucional y la falta de legitimidad de políticos y empresarios. Si bien como ya se dijo, la mayoría de las recuperaciones

de fábricas son previas a esta fecha, los cambios en el escenario político, así como la hiperpolitización de la población constituirán un hito para las fábricas recuperadas como movimiento social. Las mismas tendrán mayor visibilidad pública y apoyo de la comunidad, que ve como un cambio necesario el desarrollo de alternativas llevadas adelante directamente por las organizaciones de base, sin esperar soluciones desde el gobierno. Muchas asambleas barriales participaron activamente en la toma de fábricas y en la defensa de aquellas con mayor conflictividad como el caso de Brukman o Zanon.

Qué es una fábrica recuperada

Si bien existen una multiplicidad de situaciones dadas por las diferentes condiciones legales de organización (expropiadas, cooperativizadas, bajo control obrero de hecho) que se cruzan con diferencias en la forma de estructuración, existencia de jerarquía, funcionamiento de las asambleas, etc. hay ciertos rasgos que se pueden sistematizar; Siguiendo a Magnani, en las mismas hay un **control de hecho de los obreros sobre la fábrica**, donde todos tienen los mismos derechos en la toma de decisiones. La **autogestión** de las fábricas surge como parte de una respuesta desesperada de los obreros ante la posibilidad de perder su puesto de trabajo y saber que posiblemente no conseguirían reincorporarse al mercado laboral y el vaciamiento fraudulento por parte de los empresarios. Esto los lleva a tomar la decisión de poner ellos mismos en producción las fábricas.

"La recuperación de empresas representa un momento refundacional, en el cual los trabajadores se hacen cargo de las fábricas en situaciones muy desfavorables y traumáticas". (Fajn, 2003). La desinversión, el endeudamiento, la falta de capital inicial, se conjugan con el desgaste que representa la toma de instalaciones y la incertidumbre jurídico-legal.

Pese a estas trabas, **la toma de los medios de producción por parte de los trabajadores, genera un cambio cualitativo al desestructurar las relaciones capital-trabajo**, que favorece la reapropiación colectiva de los conocimientos de organización, gestión, administración, etc. de las empresas. Las asambleas se constituyen en el

mecanismo fundamental de toma de decisiones, lo que al conjugarse en la mayoría de los casos con el igualitarismo en los criterios remunerativos, modifica totalmente las relaciones de producción.

El fin de la Ley de Convertibilidad durante el gobierno de Duhalde (2002-2003) dio viabilidad económica a los productores locales, y por ende, a las empresas recuperadas. Pero esta rentabilidad genera dos procesos en sentido opuesto, ya que por un lado aumentan los beneficios para los procesos autogestionados en curso, pero por el otro disminuye el número de conflictos y aumenta la resistencia de los empresarios a deshacerse de sus fábricas, deteniendo el proceso de recuperaciones en el futuro.

En la actualidad hay en Argentina casi 200 empresas recuperadas; que han conformado diversos movimientos que las aglutinan para coordinar, difundir, ampliar las experiencias, apoyar y contener sus prácticas. Los de mayor importancia son el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que reúne cerca de 60 empresas y el Movimiento nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT) que se separó del primero en el 2003 y nuclea a unas 40 empresas recuperadas. Se destaca también la Comisión Nacional de Empresas Recuperadas y en Lucha, que profundizan su lucha planteando la necesidad del control obrero, lo que implica que las tomas de las fábricas dispararían nuevas tomas cada vez en niveles más altos hasta llegar a la toma del poder y la conformación de un nuevo Estado. En este marco se encuentran la fábrica de cerámicos Zanon de Neuquén y la textil Brukman, de Capital Federal, que impulsan la estatización bajo el control obrero, la expropiación definitiva sin cargo, destinando la producción a una orientación social. Esto las va llevando a una debilidad jurídica y un fuerte enfrentamiento con el Estado y los ex -dueños, conflictividad que se mantiene en la actualidad.

Al analizar la distribución espacial de las fábricas recuperadas, encontramos nuevamente una correlación con la división social territorial del trabajo durante el proceso de industrialización (1940-1975), así como el agravamiento de la situación que produjo la desindustrialización y la mayor crisis económica de la historia argentina. El 54% de las fábricas

recuperadas se ubica en la provincia de Buenos Aires (principalmente Gran Buenos Aires), seguida por las localizadas en la Capital federal (19,5%) y Santa Fe (16,1%), en lo que habíamos denominado el eje La Plata-Rosario. (Fajn y otros, 2003)

El paisaje de los sectores fabriles por excelencia combina elementos de estas nuevas formas de articulación de las fuerzas productivas con "esqueletos" de fábricas vacías y abandonadas que denotan la impronta de las últimas décadas. Si bien la consolidación de las empresas recuperadas como movimiento social se encuentra en un proceso incipiente, con numerosas falencias a la hora de organizarse de forma más compacta para lograr un mayor avance (conflictos entre los distintos movimientos, relaciones diferenciales con el Estado a veces asociadas a prácticas clientelares, etc.), es un aspecto que puede modificarse en un futuro.

Los cerca de 15.000 obreros que forman parte de este proceso, así como los numerosos sectores de la sociedad que apoyan una experiencia en la que los trabajadores dejan de ser objeto de apropiación de plusvalía por parte de los capitalistas, para convertirse en sujetos artífices de su destino, buscarán que la recuperación de fábricas se expanda, evitando la dolorosa y paradójica simultaneidad de fábricas abandonadas con máquinas sin funcionar y cerca de un 20% de la población del país sin un empleo que le garantice alcanzar las necesidades básicas.

CONCLUSIONES

Al analizar diferentes movimientos sociales de América Latina se puede ver claramente el carácter espacial que tienen los mismos y el modo particular en que en cada caso se articula esta territorialidad. La historicidad propia del espacio se ve reflejada en los tres casos en los que los sucesivos modos de organización de la producción se van plasmando en el territorio de una forma tal que nos permiten comprender la complejidad que lleva a su formación, estructuración y puesta en marcha de su accionar.

En todos los casos podemos ver la relación existente entre las políticas de carácter neoliberal aplicadas desde la década de los ´70, pero

implementadas con todo vigor durante la década de los '90, y el surgimiento y consolidación de estos movimientos sociales. La creciente exclusión, el empobrecimiento, la marginalidad sin precedentes que se registró en este decenio, llevaron a la organización de la sociedad que ya no espera medidas por parte de los gobiernos, sino que pasa directamente a constituirse como actor protagonista del cambio.

Esto implicará una rearticulación de las fuerzas productivas, proceso que se realiza de forma singular de acuerdo a las características propias de los respectivos espacios, pero que presenta como común denominador la apropiación del control de los medios de producción. Esto se ve con las ocupaciones de tierras en el caso del MST, la toma y recuperación de fábricas en Argentina, así como el control del espacio que realizan los cocaleros ante el intento de erradicación total del cultivo de coca, mediante el bloqueo de caminos y la organización de los Comités de Autodefensa en el Chapare.

La interacción de estos movimientos con los elementos superestructurales también presenta múltiples formas de articulación. En la mayoría de los casos se encuentran elementos dentro del marco jurídico-legal que avalan su accionar (la función social de la tierra que figura en la Constitución brasilera, la posibilidad de formación de cooperativas de trabajadores en Argentina o la defensa de la Soberanía Nacional en el caso boliviano), pero cuando dichos elementos no alcanzan para que se respeten sus reclamos, se avanza en el accionar, por dentro o por fuera del marco institucional. En este sentido, la conformación del MAS como instrumento político y su actual importancia a nivel nacional (Evo Morales presenta vastas posibilidades de acceder a la Presidencia en las elecciones de diciembre de este año), representa un caso particular de la forma en que si bien se inicia el movimiento con una causa propia de un sector

específico, los campesinos cocaleros del Trópico de Cochabamba, van a ampliar su reclamo e incluso modificar su discurso de forma tal de incorporar el apoyo de mayores sectores de la sociedad que también se oponen al tipo de políticas implementadas hasta el momento.

Pero además de consolidarse de acuerdo a las diferentes formas en que se desarrollan las fuerzas productivas en cada territorio, un rasgo de fundamental importancia para la geografía lo constituye el hecho de que estos movimientos, en su accionar, en su forma de lucha, modifican el espacio, lo transforman, lo reestructuran de acuerdo a nuevos patrones, que si bien guardan estrecha relación con esa historicidad del lugar, también logran plasmar en el mismo la posibilidad de construirlo de forma alternativa a la impuesta por el actual modo de producción.

BIBLIOGRAFIA

AMIN, Samir. "Más allá del capitalismo senil". Ed. Paidós. Bs.As., 2003.

ANDERSON, P., BLACKBURN, R., BORON, A., LOWY, M., THERBORN, G., SALAMA, P. "La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social". Ed. Eudeba, Bs. As., 1999.

ANUARIO 2004. Resumen especializado de periódicos de circulación nacional. Centro de Documentación e Información Bolivia, Cochabamba, 2004.

BORÓN, Atilio (compilador). "Nueva Hegemonía Mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales".Ed. CLACSO. Buenos Aires, 2004.

BUSTO, Edelmiro Alejandro. "Al cielo por asalto. El MST y su lucha por el socialismo en Brasil". En Asalto a la Razón. Año 1. N°1. Agosto de 2000.

CHÁVEZ, Walter . "La derrota del intelectual neoliberal". Le Monde diplomatique Artículos locales de la edición Bolivia, abril 2003.

CONTRERAS BASPINEIRO, Alex. "La marcha histórica". Centro de Documentación e Información Bolivia, Cochabamba, 1995.

Entrevista realizada a Julio Salazar. Secretario general de la Federación

del Trópico de Cochabamba. Cochabamba, febrero de 2005.

Entrevista realizada a Oscar Coca. Consejal del Departamento de Cochabamba por el MAS. Chimoré, febrero de 2005.

Entrevista realizada a Valerio Felipe. Alcalde de Chimoré, Trópico de Cochabamba. Chimoré, febrero de 2005.

FAJN, Gabriel (coordinador) y otros. "Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad". Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buenos Aires, 2003.

Foro del Sur 2004. Análisis de la realidad nacional. Centro de Documentación e Información Bolivia, Cochabamba, 2004.

GARCÍA LINERA, Álvaro. "La opción boliviana". Le Monde diplomatique Artículos locales de la edición Bolivia, enero 2003.

HURTADO, J. y LOHMAN, M. Boletín Internacional ACCION ANDINA. "Coca, drogas y desarrollo". Cochabamba, Octubre de 1994.

LE MONDE DIPLOMATIQUE. "Archivos Completos. Julio 1999 – diciembre 2003."

LIBERALI, A. y GEJO, O. "Economías regionales bajo la lupa regional". En Benitez, Liberali y Gejo. Estructura económica y comercio mundial. Ediciones Pharos, Buenos Aires, 1995.

MAGNANI, Esteban. "El cambio silencioso. Empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina". Prometeo libros. Buenos Aires, 2003.

MONTAÑES, Virginia. "Bolivia: ¿Erradicar coca o cocaleros?". En Foros del Sur. Centro de Documentación e Información Bolivia, Cochabamba, 2004.

MORISSAWA, Mitsue. «A história da luta pela terra e o MST». Expressão Popular. Sao Paulo, 2001.

MUCHNIK, Daniel. "Los últimos 40 años. La Argentina a la deriva". Capital Intelectual. Buenos Aires, 2004.

PORTO GONCALVES, C. "A geograficidade do social: uma contribucao para o debate metodologico sobre estudos de conflito e movimentos sociais

na América Latina". En Seoane, José (compilador). «Movimientos Sociales y conflicto en América Latina». Buenos Aires. Ed. CLACSO, 2003.

PORTO GONCALVES, C. "Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad". Siglo XXI editores. México D.F., 2001.

RAYNOLDS, James. "Guerra contra la hoja de coca". En Foros del Sur. Centro de Documentación e Información Bolivia, Cochabamba, 2004.

REPÚBLICA ARGENTINA. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población y vivienda 2001. publicación virtual.

SALAZAR ORTUÑO, F. "El Plan Dignidad y el militarismo en Bolivia. El caso del Trópico de Cochabamba". En Seoane, José (compilador). «Movimientos Sociales y conflicto en América Latina». Buenos Aires. Ed. CLACSO, 2003.

SEOANE, José y TADDEI, Emilio. «Resistencias Mundiales, de Seattle a Porto Alegre».. Ed. CLACSO. Buenos Aires, 2001.

SORMANI, Horacio: "Formación social y Formación espacial. Hacia una dialéctica de los asentamientos humanos". Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia. 1974

VARGAS, R. y CÓRDOVA E. "Bolivia: un país de re-configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos" en Seoane, José (compilador). «Movimientos Sociales y conflicto en América Latina». Buenos Aires. Ed. CLACSO, 2003.